

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

CONJUEZ PONENTE: JOSE EUSEBIO MORENO

Santiago de Cali, veintitrés (23) de dos mil veintidós (2022)

AUTO No. 91

RADICACION	76001-33-40-020-2012-00049-00
MEDIO CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	JORGE ARGEMIRO BOLAÑOZ MENDOZA Carolinaromero81@hotmail.com
DEMANDADO	NACION-RAMA JUDICIAL dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
ASUNTO	AUTO ACLARA SENTENCIA

AUTO RESUELVE SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA

I. PUBLICIDAD.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020. En tal virtud:

Se informa a las partes que las actuaciones procesales subsiguientes en este proceso se surtirán conforme a lo dispuesto por el **Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020**, por el cual se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

El expediente ya fue digitalizado, los archivos se encuentran en el aplicativo Mercurio, donde las partes podrán previo registro, solicitar el acceso al proceso mediante el siguiente link <https://bit.ly/3i5HGEU> en el siguiente link encontrarán un video tutorial para el ingreso a la plataforma <https://bit.ly/3yeDo3U>

Adicionalmente, todas las actuaciones se incorporarán a la plataforma Samai, donde las partes también podrán acceder a las providencias del Despacho en el siguiente link <http://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx> en este link encontrarán un video tutorial para el ingreso Samai <https://bit.ly/3BQHMIln>

Para los efectos del artículo 2 del decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co. al cual se remitirán todos los memoriales **identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial**. De celebrarse alguna audiencia se hará a través de la plataforma TEAMS. **Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG so pena de multas.**

Las partes informarán el canal digital elegido para surtir las actuaciones y notificaciones del presente proceso conforme ordena el artículo 3 del decreto 806. **En su defecto se tomarán como tales los correos electrónicos que obran en el proceso y en el SIRNA.**

RADICACION	76001-33-40-020-2012-00049-00
MEDIO CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Jorge Argemiro Bolaños Mendoza
DEMANDADO	Nación- Rama Judicial
ASUNTO	Auto aclara sentencia

Finalmente, se resalta que el Tribunal implementó el MÓDULO DE ATENCIÓN VIRTUAL, en el cual se puede obtener información sobre el uso y acceso a las plataformas digitales Mercurio y Samai y para la revisión de los expedientes. Para acceder a ese servicio se debe dar click en <https://bit.ly/3htGomK> o a través de <https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-del-valle-del-cauca/atencion-al-usuario>, en el horario de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., de lunes a viernes.

II. IMPULSO.

La parte demandante pretende en el petitum inicial¹:

“PRIMERA.- Declarar la nulidad de las Resoluciones 1454 del 4 de abril de 2011, 3087 del 9 de mayo de 2011, 6287 del 31 de diciembre de 2011 y la 1694 del 27 de abril de 2011.

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NACION- RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar en favor de JORGE ARGEMIRO BOLAÑOZ MENDOZA, de conformidad con el cargo y la categoría respectiva ocupada al momento de devengar el salario y las prestaciones respectivas, lo siguiente:

2.1- A liquidar y pagar, todas las prestaciones sociales devengadas durante el tiempo de su vinculación como funcionario judicial, con inclusión para dicho reajuste y pago del TREINTA (30) POR CIENTO de la prima especial mensual que prevé el artículo 14 de la ley 4 de 1992 y sus Decretos reglamentarios, para lo cual se ha de inaplicar la expresión “sin carácter salarial” de los siguientes artículos: el artículo 6 del Decreto 57 del 7 de enero de 1993, el artículo 6 del Decreto 0106 del 13 de enero de 1994, el artículo 7 del Decreto 43 del 10 de enero de 1995, el artículo 6 del Decreto 36 del 5 de enero de 1996, el artículo 6 del Decreto 76 del 10 de enero de 1997, el artículo 6 del Decreto 64 del 10 de enero de 1998, el artículo 6 del Decreto 44 del 8 de enero de 1999, el artículo 7 del Decreto 2740 del 27 de diciembre de 2000, el artículo 7 del Decreto 2720 del 17 de diciembre de 2001, el artículo 6 del Decreto 673 del 10 de abril de 2002, el artículo 7 del Decreto 3569 del 11 de diciembre de 2003, el artículo 6 del Decreto 4172 del 10 de diciembre de 2004, el artículo 6 del Decreto 936 del 30 de marzo de 2005, el artículo 6 del Decreto 389 del 8 de febrero de 2006, el artículo 6 del Decreto 618 del 2 de marzo de 2007, el artículo 6 del Decreto 658 del 4 de marzo de 2008, el artículo 8 del Decreto 723 del 6 de marzo de 2009, el artículo 8 del Decreto 1388 del 26 de abril de 2010 y el artículo 8 del Decreto 1039 de 2011 y los subsiguientes que con el mismo criterio se expidan.

2.2- Se liquiden y paguen, las diferencias salariales y prestacionales correspondientes a los años 2009 y siguientes, con inclusión para dicho reajuste y pago, en la base del 70%, del auxilio de cesantía que devengan los Magistrados de las Altas Cortes.”

Mediante providencia No. 111 del 27 de octubre de 2021 esta Sala de Decisión profirió sentencia de segunda instancia modificando el fallo del Juzgado.

Mediante memorial del 08 de noviembre de 2021 la parte actora solicita aclarar la sentencia. Manifiesta que, si bien se abordaron todas las pretensiones, se incurrió en

¹ FL 43

RADICACION	76001-33-40-020-2012-00049-00
MEDIO CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Jorge Argemiro Bolaños Mendoza
DEMANDADO	Nación- Rama Judicial
ASUNTO	Auto aclara sentencia

un error al aplicar una norma que solo cubre a los Magistrados y no a los jueces, como el caso del demandante. Por lo anterior, solicitó aclarar este aspecto en la parte resolutive y considerativa.

CONSIDERACIONES

El Artículo 285 del Código General del Proceso, impone:

“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”

Por disposición del legislador la aclaración solo procede cuando la providencia contenga conceptos o frases que ofrezcan verdaderos motivos de duda y que esta se encuentre en la parte resolutive o influya en ella.

Ahora, revisada la providencia referida, la Sala de Conjuces evidencia que se incurrió en un error por lo que procede a aclarar la sentencia.

En primer lugar, y respecto a la solicitud de reajuste y pago del 30% de la prima especial establecida en la ley 4 de 1992, se cita la sentencia de unificación proferida por la Sala de Conjuces del Consejo de Estado², en la cual se pronunciaron frente al tema:

1. “La prima especial de servicios es un **incremento** del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjuces, C.P. Carmen Anaya de Castellano, sentencia del 02 de septiembre de 2019, CE-SUJ-016-S2-19.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”

Conforme la jurisprudencia de unificación de la alta Corporación, es claro que el actor tiene derecho a que la Rama Judicial le reliquide y pague el 30% de la prima especial como un incremento a la asignación básica, y que dicha prima no constituye factor salarial, excepto tratándose de la pensión de jubilación.

Así las cosas, se aclarará la sentencia del 27 de octubre de 2021, ordenando su reliquidación en la forma antes referida, a partir del 21 de febrero de 2008, por aplicación de la prescripción trienal, toda vez que la solicitud fue radicada en la entidad en 21 de febrero de 2011.

Ahora, respecto a la pretensión de incorporar la cesantía del Magistrado de Alta Corte como un elemento de la base liquidatoria del salario, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1251 de 2009, se considera:

El artículo 15 de la ley 4 de 1992 establece:

“Art. 15. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, **que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del congreso, sin que en ningún caso los supere.** El Gobierno podrá fijar la misma prima para los ministros de despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública”.

A su vez el Decreto 10 de 1993, “Por el cual se regula la prima especial de servicios”, textualmente dispuso:

“Artículo 1º. – La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los Miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella.”

“Artículo 2º. **Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente incluyendo la prima de navidad.**”

“Artículo 3º. Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del Congreso.”

“Artículo 4º. La prima a que se refiere este Decreto se pagará mensualmente, no tiene carácter salarial y no se tendrá en cuenta para la determinación o

haber de otros funcionarios o empleados de cualquiera de las ramas del Poder Público, Fuerzas Militares, organismos o entidades del Estado.”

“Artículo 5º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1993 y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 873 de 1992.”

De las normas citadas se infiere, que el tope de los pagos los funcionarios allí mencionados, ha de ser lo pagado a los miembros del Congreso. Preciso así el punto el Consejo de Estado, en sentencia del 4 de mayo de 2009³:

“Lo anterior no significa que magistrados y congresistas, como lo entendió el Ministerio Público, tengan identidad de prestaciones, por cuanto estas dependen de la particularidad de la función. Lo esencial es que el monto total anual que por concepto de ingresos laborales permanentes reciben estos funcionarios, sea idéntico. **Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los magistrados de las altas cortes y que estos últimos, que es situación diferente, tienen entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales.**”

En el fallo citado determinó que los emolumentos que hacen parte del ingreso mensual total percibido por los Congresistas: el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, la prima de salud y la prima semestral, **a los que se debe agregar el auxilio de cesantía**, puesto que se trata de un ingreso laboral, toda vez que lo perciben los congresistas como consecuencia de la relación que ostentan con la entidad, es de carácter permanente en tanto que la reciben año tras año.

En conclusión a los congresistas dentro de su asignación mensual, se les debe incluir las Cesantías, lo cual no viene operando para los funcionarios enunciados en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y, en particular, a los Magistrados de alta Corte. Por ello, el fallo que se viene citando concluyó confirmando y ordenando pagar dicha prestación a estos últimos, para que fuera incluida en la base de liquidación. En este sentido, dijo:

“Al no incluirse las cesantías, por considerar la Entidad demandada que la norma no lo permitía, concluye la Sala que se presentó una falsa motivación en los actos acusados, lo que da lugar a su anulación, como efectivamente así lo hizo el Tribunal de primera instancia, razón por la cual se confirmará la providencia apelada que accedió a las súplicas de la demanda.”

Conforme con lo expuesto, la ley 4 de 1992, a través de su artículo 15, equiparó los derechos salariales de los Magistrados de las Altas Cortes con los percibidos por los miembros del Congreso, de tal suerte que al reconocer la Alta Corporación el carácter de factor salarial del “auxilio de Cesantía” para los miembros del Congreso, se concluye que debe ser incluida para establecer el monto total de los ingresos anuales percibidos por estos, lo que indefectiblemente genera un incremento en las respectivas liquidaciones prestacionales.

La anterior postura fue ratificada en reciente pronunciamiento del H. Consejo de Estado, Sala de Conjuces, mediante **Sentencia de Unificación del 18 de mayo de**

³ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA- SALA DE CONJUECES- CONJUEZ
PONENTE: LUIS FERNANDO VELANDIA RODRÍGUEZ. BOGOTÁ, D.C., CUATRO (4) DE MAYO DE DOS MIL NUEVE (2009). NO. DE REFERENCIA: 250002325000200405209 02 NO. INTERNO: 0552-2007 AUTORIDADES NACIONALES. ACTOR: NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA.

2016, con ponencia del doctor JORGE IVAN ACUÑAARRIETA, en la cual se estableció finalmente la forma en que debía aplicarse el artículo 15 de la ley 4ª de 1992, expresando lo siguiente:

“No puede desvirtuarse el sentido literal del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 acudiendo a una interpretación según la cual el artículo 16 ejusdem fijó, de manera implícita, que los beneficiarios de la prima especial de servicios habían de percibir una remuneración distinta a la recibida por los Parlamentarios. Lo único que esta norma pretende al establecer que: “La remuneración, las prestaciones sociales y los demás derechos laborales de los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los Fiscales del Consejo de Estado serán idénticos” es que se respete el derecho a la igualdad salarial de funcionarios que ocupan cargos semejantes.

Teniendo en cuenta que la ley determina como finalidad de la prima especial de servicios la equiparación de los ingresos percibidos por los Magistrados de las Altas Cortes a aquellos que devengan los miembros del Congreso de la República, mal podría señalarse que un decreto que cumple la función de reglamentar dicha Ley podía establecer cosa distinta. De hecho, el Decreto 10 de 1993 no lo hizo. Todo lo contrario, tal cuerpo normativo desarrolló de manera precisa los términos en los que debía darse la equiparación en el ingreso de los más altos funcionarios de varias ramas del poder público al señalar que había de efectuarse sobre la totalidad de los ingresos laborales anuales recibidos por unos y otros.

*Es claro, entonces, que en ninguna de las normas que contienen el régimen de la prima especial de servicios se hizo la distinción entre salario y prestaciones sociales. Se habló, en cambio, de ingresos **laborales** totales”.*

Y más adelante agregó:

“Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores⁴, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.

*De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas”.*⁵

En línea con lo expuesto, debe continuar la Sala por indicar que el Decreto 1251 de 2009 y los subsiguientes proferidos en los años posteriores, señalaron:

“Art. 3. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el **Juez Municipal**, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Sentencia de 4 de mayo de 2009, Rad. No. 250002325000200405209 02, C.P., Dr. Luis Fernando Velandía Rodríguez

⁵ Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sentencia del 18 de mayo de 2016, CONJUEZ PONENTE: JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA, EXP. 250002325000201000246-02

RADICACION	76001-33-40-020-2012-00049-00
MEDIO CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Jorge Argemiro Bolaños Mendoza
DEMANDADO	Nación- Rama Judicial
ASUNTO	Auto aclara sentencia

Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de Instrucción Penal Militar **será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente 0el Magistrado de las Altas Cortes.**

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.”

En este orden de ideas, al hacer parte las Cesantías de los Magistrados de alta Corte de la base liquidatoria del 70%, que a su vez se tiene en cuenta para calcular el porcentaje sobre el cual se fija la remuneración del **Juez municipal**, tal como el demandante, se hace evidente que tiene derecho a que el porcentaje cancelado a ésta desde el **01 de enero del año 2009** sin incluir el auxilio de Cesantía, se reliquide, de tal forma que incluya tal emolumento y en cumplimiento a la norma en cita y en los términos indicados por el H. Consejo de Estado, se tenga en cuenta “lo que por todo concepto perciba anualmente un Magistrado de las Altas Cortes”.

Lo anterior, impone aclarar la sentencia No. 111 del 27 de octubre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DECISIÓN

En mérito de las consideraciones que anteceden, El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjuces, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: ACLARAR la sentencia No. 111 del 27 de octubre de 2021 proferida por esta Corporación- Sala de Conjuces, en el sentido de modificar los numerales 1, 2 y 3 del fallo del 27 de marzo de 2017, el cual quedará así:

“**PRIMERO:** Declarar la nulidad de las resoluciones No. 1454 del 04 de abril de 2011, 3087 del 09 de mayo de 2011, 6287 del 31 de diciembre de 2011 y 1694 del 27 de abril de 2011.

SEGUNDO: Como restablecimiento del Derecho ordenase a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:

Reliquidar y pagar al Doctor JORGE ARGEMIRO BOLAÑOS MENDOZA su remuneración y prestaciones sociales a partir del 21 de febrero de 2008, incluyendo el 30 % de prima especial de servicios, en la forma dispuesta en la parte motiva de esta providencia.

Reliquidar y pagar al Doctor JORGE ARGEMIRO BOLAÑOS MENDOZA su remuneración y prestaciones sociales a partir del 01 de enero de 2009, conforme al artículo 3 del Decreto 1251 de 2009⁶, con todos los conceptos que perciban anualmente los Magistrados de Alta Corte, incluyendo las cesantías.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo del 27 de marzo de 2017.

⁶ Decreto que entro a regir a partir del 01 de enero de 2009.

RADICACION	76001-33-40-020-2012-00049-00
MEDIO CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Jorge Argemiro Bolaños Mendoza
DEMANDADO	Nación- Rama Judicial
ASUNTO	Auto aclara sentencia

CUARTO: NO CONDENAR en costas, conforme a la parte motiva de la presente providencia, porque no se observa temeridad en el proceso, como lo ordena el Decreto 01 de 1984.

NOVENO: En firme esta decisión, devolver el expediente hibrido al Juzgado de Origen previa anotación en Samai.”

Providencia discutida y aprobada en Sala de Decisión, Según costa en Acta de la fecha.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**JOSE EUSEBIO MORENO
CONJUEZ PONENTE**

**MARÍA EUGENIA CLAVIJO
CONJUEZ**

AUSENTE POR ENFERMEDAD

**CONSUELO HOYOS DE MEJIA
CONJUEZ**